



*Procuraduría General de la República*  
*República de Honduras*

**CONTESTACION AL ESCRITO DE DEMANDA INTERPUESTO POR LA COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS (CIDH) EN CONTRA DEL ESTADO DE HONDURAS Y AL ESCRITO DE SOLICITUDES, ARGUMENTOS Y PRUEBAS, EN EL CASO CDH-13-2015/002: "ANGEL PACHECO LEON Y FAMILIA".**

Tegucigalpa, M.D.C., 05 de Julio de 2016

Doctor  
Pablo Saavedra Alessandri.  
Secretario de la Honorable Corte  
Interamericana de Derechos Humanos.  
Su Despacho.

Señor Secretario:

Respetuosamente me dirijo a Usted, en Representación del Estado de Honduras, conforme a lo prescrito en el artículo 41 del Reglamento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en ocasión de interponer la contestación sobre el **Caso CDH-13-2015/002: "Ángel Pacheco León y Familia"**, sometido a la jurisdicción de ese Alto Tribunal por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el 18 de marzo de 2016, por la presunta violación del Estado de Honduras de los derechos a la vida, a la integridad personal, a las garantías judiciales, los derechos políticos y del derecho a la protección judicial, consagrados en los artículos 1.1, 2, 4, 5, 8, 23 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), en perjuicio de Ángel Pacheco León, Blanca Rosa Herrera Rodríguez, Cinthia Mirella Pacheco Devicente, Miguel Ángel Pacheco Devicente, Jimmy Javier Pacheco Ortiz, Tania Melissa Pacheco López, Juan Carlos Pacheco Euceda, Bianca Giselle Pacheco Herrera, Andrea Pacheco López, Maria Otilia Pacheco, Concepción Pacheco, Blanca Nubia Pacheco, José Pacheco, María Regina Pacheco, Francisco Pacheco, Santos Norma Pacheco, Marlene Pacheco, Yamileth Almendarez Pacheco, Jackeline Almendarez Pacheco, y Jorge Alberto Almendarez Pacheco; en adelante denominadas las "víctimas".

Asimismo, basado en el artículo 23 del Reglamento precitado, el Estado de Honduras ha designado a los Abogados Jacobo Calix Hernández, y Roberto Ramos Bustos, en calidad de Agentes Alternos, para actuar en el trámite del presente caso. Y, en consecuencia, tomando en consideración el Informe de Fondo de la Comisión Interamericana, el escrito de sometimiento ante la jurisdicción de esa Honorable Corte Interamericana, y el de solicitudes, argumentos y pruebas (ESAR)





*Procuraduría General de la República*  
*República de Honduras*

de las supuestas víctimas o sus representantes, respetuosamente me permito formular la contestación siguiente:

Ante las decisiones de los órganos del Sistema Interamericano de protección en materia de derechos humanos, el Estado de Honduras cumple con su obligación de responder, con todo respeto, a las argumentaciones expuestas, en los escritos anteriormente indicados, por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, (CIDH) y demás representantes, de los que se consideran afectados en el ejercicio de sus derechos.

## I. ANTECEDENTES:

### 1. Hechos.

Como es de vuestro conocimiento, el día viernes, veintitrés (23) de noviembre de dos mil uno (2001), aproximadamente a las 11:45 de la noche, fue asesinado el señor **Ángel Pacheco León** en la ciudad de Nacaome, Departamento de Valle, quien se postulaba como candidato a primer Diputado por ese Departamento<sup>1</sup> en representación del Partido Nacional. El día de los hechos, la víctima se dirigía caminando, en compañía de uno de sus hijos Jimmy Javier Pacheco Ortiz, a la casa que tenía como sede para realizar sus reuniones. Cuando al abrir la puerta, su hijo se percató que de un solar baldío, que estaba junto a la sede, salió un sujeto desconocido, corriendo hacia ellos, por lo que el menor trato de cerrar la puerta para que el sujeto no ingresara, logrando entrar y disparar en diversas ocasiones contra la humanidad del Señor Pacheco León, causándole la muerte. Luego, quiso dispararle al menor, pero su arma ya no tenía proyectiles, saliendo este en veloz carrera para abordar un vehículo que lo esperaba cerca del lugar.

Una vez levantado, de inmediato, el POR CUANTO por el Juzgado de Letras Seccional de esa ciudad, a las 12:40 a.m. del día sábado veinticuatro (24) de noviembre de dos mil uno (2001), el señor Pacheco León fue trasladado hacia el Hospital de San Lorenzo; falleciendo en el camino. Posteriormente, su cadáver fue ingresado a la morgue de la Dirección de Medicina Forense.

### 2. Diligencias de investigación y procedimientos judiciales realizados.

El Estado de Honduras, tal como se señaló en el escrito de la Comisión, a partir de la fecha en que ocurrieron los hechos se iniciaron las diligencias investigativas de

<sup>1</sup> De conformidad al proceso electoral vigente en el año 2001, en un primer momento se realizaban las elecciones primarias internas de los diferentes partidos políticos, para la escogencia de los candidatos que se presentarían en la planilla de cargos de elección popular que nominaba cada partido para el proceso electoral de elecciones generales.





*Procuraduría General de la República*  
*República de Honduras*

oficio. Es importante señalar, que en la fecha de la comisión del hecho, se encontraba vigente el Código de Procedimientos Penales, Decreto No. 189-84 de 24 de octubre de 1984 y publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 27 de febrero de 1985, de ahí que la causa se inicia en el Juzgado Penal, a quien correspondía el impulso procesal, pues se seguía un procedimiento de índole inquisitivo que, por definición era más lento. En la actualidad rige un proceso penal de corte acusatorio, desde la entrada en vigencia del actual Código Procesal Penal que fue aprobado mediante Decreto No. 9-99-E del 19 de diciembre de 1999 y publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 20 de mayo del 2000. Entrando en vigencia el 20 de febrero del año 2002, con lo cual el Estado implemento un modelo procesal más garante de los derechos de los imputados y de las víctimas, a través de la realización de los juicios orales y públicos, siendo la finalidad del proceso la realización pronta y efectiva de la justicia penal.

Conforme al mencionado proceso inquisitivo, a raíz de la declaración rendida por el hijo del ofendido Jimmy Javier Pacheco, se les dio detención y fueron puestos a la orden de la autoridad competente los señores Yehring Roberto Maldonado, Héctor Efraín Estrada Castro y Alberto Vijil Espinoza, en fecha 27 de noviembre del 2001, por el delito de Asesinato, en perjuicio de Ángel Pacheco León; decretándose por parte del Juzgado de Letras Seccional de Nacaome, Departamento de Valle, en fecha 30 de noviembre del 2001, Auto de Prisión contra los señores Héctor Efraín Estrada Castro Y Alberto Vijil Espinoza; dejando en Libertad Provisional al señor Yehring Roberto Maldonado. Finalmente, se les revocó el Auto de Prisión dictado por falta de méritos, siendo sobreseídos, ya que el único testigo presencial de los hechos, Jimmy Javier Pacheco (hijo de la víctima) no reconoció en audiencia de confrontación a los imputados como partícipes del hecho.

Dentro de este mismo proceso, en las etapas iniciales de las diligencias investigativas, tal como señala el escrito presentado por la Comisión, en la escena del crimen se encontraron varias pruebas, como casquillos, fragmentos de balas y un cheque<sup>2</sup>; además, indican que según el agente de investigación la escena habría sido contaminada "observando pisadas de calzado en manchas de sangre", lo cual estaría justificado en el sentido que, tal como señalaron en su momento los peticionarios en sus escritos, el señor Ángel Pacheco León fue llevado hacia el Hospital de San Lorenzo<sup>3</sup>, lo que implicaría que lamentablemente por el mismo afán de salvar a su familiar, las personas cercanas a él, podrían haber permitido el ingreso de otras personas al lugar donde se produjo el hecho, a fin de poder trasladarlo al Hospital, lo cual no sería atribuible al Estado y no pueden indicarse

<sup>2</sup> Vid. POR CUANTO del Juzgado de Letras Seccional de Nacaome Departamento de Valle de fecha 24 de noviembre de 2001 Anexo No. 2, folio 166.

<sup>3</sup> Informe de Fondo No. 49/15 caso 12.585 Ángel Pacheco León y Familia vs Honduras, Párrafo 41





*Procuraduría General de la República*  
*República de Honduras*

que se trate de irregularidades en las etapas iniciales del proceso, como señala la CIDH.

Dentro de las diligencias investigativas, el Juez de Letras Seccional de Nacaome, Valle, previa solicitud del Ministerio Público con sede en esa ciudad, ordenó el allanamiento de las casas de los Señores Jorge Alberto Berrios, Salvador Cárdenas Romero y Wilfredo Cárdenas Romero<sup>4</sup> en busca de evidencias, particularmente armas de fuego, supuestamente utilizadas para dar muerte al Señor Ángel Pacheco León. Se encontró un arma en la casa del Señor Berrios y se solicitó practicar el examen de balística respectivo, pero la Dirección de Medicina Forense determinó que no era el arma utilizada para cometer ese asesinato<sup>5</sup>.

Por lo anterior, en relación con el inicio de la causa contra Yehring Roberto Maldonado, Héctor Efraín Estrada Castro y Alberto Vijil Espinoza, en el año 2001, que concluye en el año 2003 con la confirmación, a través de la Corte de Apelaciones, del sobreseimiento de todas las personas que fueron encausadas en ese momento, deja evidenciado que el proceso investigativo se llevó a cabo de una forma continua. La resolución obtenida en este caso, si bien no dio lugar a que se dictase el respectivo Auto de Prisión, no se puede considerar como denegatoria de justicia, no obstante, en julio de 2004, los familiares del señor Pacheco León solicitaron la intervención de la Fiscalía Especial de Derechos Humanos, pues consideraron que se denegaba el derecho a la justicia en relación con el proceso iniciado en Nacaome, el cual no se encontraba inactivo.

Entre las diligencias investigativas realizadas por la Fiscalía Especial de Derechos Humanos, mediante denuncia presentada por los familiares del Señor Pacheco León contra Jorge Alberto Berrios Escoto y otros, la investigación mostró la existencia de indicios, no elementos de prueba contundentes que vinculen a los sospechosos. Cabe destacar que este indiciado ya falleció<sup>6</sup>.

En el año 2005, la Fiscalía Local de Nacaome, Valle, para prevenir posibles injerencias o presiones, presentó recusación ante el Juzgado de Letras Seccional de Nacaome, Valle, a fin de poner en conocimiento del expediente al Juzgado del

<sup>4</sup> Vid. Solicitud de Allanamiento presentado por el abogado Ramón Abraham Hernández Cruz en su condición de Fiscal del Ministerio Público en Juzgado de Letras Seccional de Nacaome, depto. de Valle de fecha 24 de enero de 2002 y ejecutado en fecha 25 de enero de 2002 Anexo 2 Folio 292.

<sup>5</sup> Vid. Solicitud de Dictamen Balístico presentado por el abogado Ramón Abraham Hernández Cruz en su condición de Fiscal del Ministerio Público en Juzgado de Letras Seccional de Nacaome, depto. de Valle de fecha 30 de enero 2002 presentado ante el Juzgado de Letras Seccional de Nacaome. Pericia balística realizada en la Dirección de Medicina Forense del Ministerio Público de fecha 12 de abril 2002 Folio. Ver Anexo 2 folios 294 y 325.

<sup>6</sup> Vid. Certificación de Acta de Defunción No. 0801-2005-01668 del señor Jorge Alberto Berrios Escoto. Anexo 3 folio 49





*Procuraduría General de la República*  
*República de Honduras*

Letras Segundo Departamental de Choluteca, por considerar que habría empleados del Juzgado que tenían una amistad cercana con los procesados.

Posteriormente el Fiscal German Enamorado adscrito a la Fiscalía Especial de Derechos Humanos solicitó al Juez de Letras Segundo Departamental de Choluteca la exhumación del cadáver del señor Ángel Pacheco León en fecha 10 de agosto del 2005. El 15 de agosto del 2005 mediante Cédula de Notificación, se admite el escrito de exhumación del cadáver del occiso y así mismo se concede la autorización al Ministerio Público para que la practique. En Comunicación realizada por el Abogado Rafael Antonio Oviedo, Juez de Letras Segundo Departamental de Choluteca, en fecha 9 de septiembre del 2005 se nombra como Perito al Doctor Ismael Edgardo Raudales para que, en su condición de Patólogo Forense, proceda a realizar la exhumación y toma de muestras para el análisis de ADN del cadáver; diligencia que se autorizó realizar el día viernes 16 de septiembre del 2005 a las ocho (08:00) de la mañana.

Dicha exhumación tenía por objeto analizar el ADN y determinar el RH, y así como las comparaciones con los residuos sanguíneos encontrados en la escena del crimen, por lo que son enviados siete indicios a los Laboratorios de Genética Forense, incluido un afiche político al que se hacía mención por parte de los peticionarios y restos óseos. Después de haber realizado la exhumación y ser analizados todos los indicios, se da un dictamen donde se establece que el perfil genético encontrado en el afiche, entre otros, no corresponde al perfil genético del occiso. Por lo que según se indica en el párrafo 62 del informe de Fondo<sup>7</sup>, ese es el contexto en que se realizó dicha exhumación; que, si bien no aportó evidencia significativa, en el sentido que no coincidió con las muestras encontradas, demuestra la realización de actividades investigativas complejas llevadas a cabo por el Ministerio Público de forma diligente, dirigidas a recabar prueba científica.

Respecto a la destrucción de las muestras a que se hace referencia reiteradamente, corresponden a las muestras biológicas de la autopsia No. 1422-2001 pertenecientes al señor Pacheco León. Es importante señalar que en el año 2001 se les realizó todos los análisis solicitados por el Departamento de Patología Forense y que el remanente de las mismas fue depositado y conservado hasta el 12 de octubre del 2004.

En referencia a lo alegado en el ESAP, de que no se habría seguido la cadena de estudios hematológicos de tales muestras, mediante transcripción del Dictamen realizado por el Jefe de los Laboratorios Criminalísticos y de Ciencias Forenses a solicitud del licenciado Ramón Abraham Cruz Hernández, coordinador de la Fiscalía Regional de Nacaome, Valle, previa verificación en los archivos del Laboratorio de Inmunomicrobiología correspondientes al día 30 de noviembre del 2001, se señala

<sup>7</sup> Informe de Fondo No. 49/15 caso 12.585 Ángel Pacheco León y Familia vs Honduras, Párrafo No. 62





*Procuraduría General de la República*  
*República de Honduras*

que se realizaron todos los análisis forenses solicitados a las evidencias, referente al caso Pacheco León<sup>8</sup>. De modo que la destrucción de esas muestras biológicas no significó un daño o alteración al proceso investigativo.

Posteriormente, se tomó nuevamente declaración al joven Jimmy Javier Pacheco en fecha 22 de mayo del 2008, en el cual describe al agresor como una persona cuyas características son: *"que era fornido, de una estatura de 1:75 a 1:80 metros, con bastante estómago, corneto, y que vestía una camiseta blanca, pantalón oscuro con una gorra roja y observó cuando se sacó el arma y se abalanzó hacia la puerta de la casa, intentando cerrarla pero no pudo debido a que el sujeto puso el pie, fue cuando su padre Ángel Pacheco le preguntó lo que estaba sucediendo, sacando la cabeza el señor Pacheco para ver qué era lo que pasaba y en ese mismo instante el sujeto comenzó a disparar sobre la humanidad de su padre Pacheco León"*.<sup>9</sup>

Además de las fotografías mostradas para que el joven Jimmy Javier Pacheco León, determinara, si él reconocía a algunas de las personas como el sujeto que realizó los disparos a su padre. Éste respondió que no los reconoce directamente, pero que dos de ellos tenían rasgos del sujeto que observó que le disparó a su padre.

En el año 2012, en las investigaciones realizadas en la Fiscalía Especial de Derechos Humanos se estableció que el autor material del delito podría ser un miembro de la Policía Nacional Preventiva, del cual se obtuvo patrón fotográfico, solicitándosele al señor Jimmy Javier Pacheco único testigo presencial, para que hiciera el reconocimiento del mismo, manifestando que se le parecía a la persona que dio muerte a su padre, pero que lo reconocía en un 75%, o sea que no está totalmente seguro, existiendo la posibilidad pero no la certeza. Sin embargo, se continúa investigando a este policía como el posible autor material de dicho ilícito.

Posteriormente, la Fiscalía Especial de Derechos Humanos, realizó una gira de trabajo en las ciudades de Choluteca y Nacaome, del 18 al 21 de marzo del 2014, realizándose las diligencias que se detallan a continuación:

- Inspección al libro de control de casos de homicidios de la Dirección Nacional de Investigación Criminal (DNIC), donde el caso se encuentra registrado mediante denuncia 1605-2001 de fecha 24 de noviembre del 2001.
- Entrevista con el Abogado Osmin Alvaro Durán, fiscal que tiene asignado el caso en la ciudad de Choluteca, referente a las investigaciones realizadas y

<sup>8</sup> Vid. Transcripción de Dictamen a solicitud del Lic. Ramón Abraham Cruz Hernández Coordinador de la Fiscalía de Nacaome Valle Anexo 2 Folio 225.

<sup>9</sup> Vid. Declaración de Testigo rendida por el joven Jimmy Javier Pacheco León en la Dirección General de Investigación Criminal (DGIC) de fecha 22 de mayo de 2008. Anexo 3 Folio 33.





*Procuraduría General de la República*  
*República de Honduras*

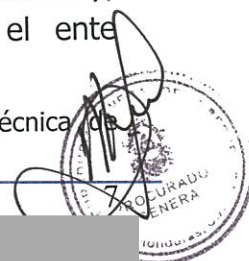
algunos aspectos a considerar.

- Inspección al libro de control de denuncias del 2002 - 2003 de la Dirección Nacional de Investigación Criminal (DNIC) en Nacaome, a efecto de verificar el seguimiento que se le ha dado al caso.
- Solicitud de informe al Inspector de policía Juan Anteportán Martínez, coordinador de la DNIC de Nacaome, sobre el estado del caso.
- Declaración del testigo del señor José Félix Torres Núñez.
- Entrevista con la señora Santos Clara Jiménez en las oficinas de la DNIC. No firmó declaración por manifestar tener temor a su vida y la de su familia.
- Inspección en el Juzgado de Letras Segundo de Choluteca al Expediente N. 02-2005
- Declaración del testigo Pedro Canales Flores.
- Se procedió a citar nuevamente en legal y debida forma en condición de testigos a los señores José Félix Torres Núñez y Juan José Quiroz para que comparecieran a las oficinas de la Fiscalía Especial de Derechos Humanos, el día viernes 4 de abril de 2014 a las 09:00 am. Sin embargo, el primero, no compareció, indicando vía llamada telefónica que no podía presentarse a la citación por problemas de salud y económicos, pero que no se niega a colaborar en el presente caso y el señor Quiroz no se presentó a la cita programada desconociendo los motivos.
- En vista de la solicitud realizada por el señor José Pacheco, hermano del ofendido, en el sentido de ampliar la declaración del señor José Félix Torres Núñez, quien reside en la ciudad de Nacaome, Departamento de Valle, personal de la Fiscalía Especial de Derechos Humanos se dirigió a dicha ciudad; una vez allí presentes en la casa de habitación del señor Torres, Núñez se informó por parte de su esposa y nuera que él había fallecido en fecha 24 de julio del 2014.

Más recientemente se ha continuado con las diligencias investigativas, y en abril de 2015, a petición del Fiscal a cargo del caso, a través de la Dirección General de Fiscalía se solicitó a la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), de reciente creación, adscrita al Ministerio Público, que apoyara la realización de diligencias. Como resultado de esas investigaciones, la Agencia Técnica de Investigación Criminal indica que entre otras diligencias realizadas está la toma de declaración al señor José Pacheco León, quien pone oficialmente en conocimiento sobre las supuestas amenazas hechas a su persona y familiares del occiso.<sup>10</sup>

De esta manera, el Ministerio Público ha mostrado el interés de impulsar la investigación de este caso, realizando diligencias investigativas con ese fin. Si bien, es evidente que no ha podido identificarse plenamente a los autores materiales y, en su caso, a los autores intelectuales, no es menos cierto que el ente

<sup>10</sup> Vid. Declaración como testigo del señor José Pacheco León, ante la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), el 15 de febrero de 2016. Anexo 3 Folio 47





*Procuraduría General de la República*  
*República de Honduras*

investigativo ha realizado una serie de diligencias encaminadas al esclarecimiento de los hechos, tomando como base las declaraciones de las decenas de testigos que han sido interrogados, varias diligencias para el reconocimiento fotográfico, declaraciones de sospechosos, pericias sobre muestras biológicas, allanamientos de las casas de los sospechosos, registros en busca de evidencias, particularmente armas de fuego, sobre las que se realizaron pericias balísticas, identificación de vehículos que pertenecen a los sospechosos, inspecciones a pieza judicial de mérito, inspecciones a los archivos de la Policía Nacional Preventiva y de la entonces Dirección de Investigación Criminal, detalle de llamadas del número telefónico de la víctima<sup>11</sup>, entre otras diligencias efectuadas, tanto en Choluteca como en Tegucigalpa; las que han orientado el curso de la investigación.

Ante la complejidad del caso y el tiempo transcurrido, y a pesar de contar con diversas hipótesis y varios sospechosos, no se cuenta aún con elementos de prueba que permitan demostrar quienes serían los autores materiales e intelectuales de dicho crimen; por lo que no se puede desconocer que sí se han realizado avances investigativos en el caso.

Sobre las supuestas amenazas sufridas por los familiares de la víctima, tanto en la Fiscalía Especial de Derechos Humanos, como en la Coordinación Regional de Fiscales de la Zona Sur, se ha constatado, después de haber revisado los expedientes del caso, que no se han encontrado denuncias ni declaraciones por parte de los familiares del señor Ángel Pacheco León, en las que manifestaran que estaban siendo amenazados. Además, se revisó la base de datos de las denuncias recibidas en ambas dependencias para verificar si se ha interpuesto alguna denuncia por amenazas en perjuicio de los familiares del señor Pacheco León, comprobándose que no se ha recibido denuncia alguna,<sup>12</sup> sino hasta el año 2016, cuando el señor José Pacheco, lo hizo de conocimiento de los agentes de la ATIC, como se indicó anteriormente.

## II. COMPETENCIA.

La Corte Interamericana es competente en los términos del artículo 62 de la Convención Americana para conocer el presente caso, en virtud de que el Estado de Honduras es Estado Parte de la Convención desde el ocho (08) de septiembre de mil novecientos setenta y siete (1977); y, reconoció la competencia obligatoria de la Corte el nueve (09) de septiembre de mil novecientos ochenta y uno (1981).

<sup>11</sup> Vid. Detalle de llamadas telefónicas de la empresa "Telefónica Celular" CELTEL de fecha 23 de noviembre de 2001. Anexo 1 Folio 123-131 y Anexo 3 Folio 1-9.

<sup>12</sup> Vid. Memorandum FLN-248-2014 de fecha 27 de noviembre de 2014 del Ministerio Público para la abg. Dunia Flores en su condición de Fiscal de Derechos Humanos. Anexo 3 folio 41.







*Procuraduría General de la República*  
*República de Honduras*

**III. FUNDAMENTOS DE DERECHO**  
**SOBRE LAS VIOLACIONES ALEGADAS POR LA CIDH Y LOS**  
**PETICIONARIOS.**

**1. Artículo 4: Derecho a la Vida:**

El Artículo 4 de la Convención Americana. Establece:

1. *"Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley, y en general, a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente.*
2. *En los países que no han abolido la pena de muerte, ésta solo podrá imponerse por los delitos más graves, en cumplimiento de sentencia ejecutoriada de tribunal competente y de conformidad con una ley que establezca tal pena, dictada con anterioridad a la comisión del delito. Tampoco se extenderá su aplicación a delitos a los cuales no se la aplique actualmente.*
3. *No se restablecerá la pena de muerte en los Estados que la han abolido.*
4. *En ningún caso se puede aplicar la pena de muerte por delitos políticos ni comunes conexos con los políticos.*
5. *No se impondrá la pena de muerte a personas que, en el momento de la comisión del delito tuvieran menos de dieciocho años de edad o más de setenta, ni se le aplicará a las mujeres en estado de gravidez.*
6. *Toda persona condenada a muerte tiene derecho a solicitar la amnistía, el indulto o la conmutación de la pena, los cuales podrán ser concedidos en todos los casos. No se puede aplicar la pena de muerte mientras la solicitud esté pendiente de decisión ante autoridad competente".*

El Estado entiende que, el derecho a la vida es un derecho fundamental, cuyo goce es esencial para el disfrute de todos los demás derechos inherentes a la dignidad humana<sup>13</sup>. En base al precepto anterior, el Estado de Honduras reconoce derechos fundamentales que plasman su voluntad y compromiso de brindar protección a toda persona, en el ámbito de su territorialidad, para evitar que sean conculcados en forma arbitraria.

<sup>13</sup> Constitución de la República de Honduras de 1982, Art. 59: "La persona humana, es el fin supremo de la sociedad y del Estado. Todos tienen la obligación de respetarla y protegerla. La dignidad del ser humano es inviolable."





*Procuraduría General de la República*  
*República de Honduras*

Tal como la jurisprudencia de la Corte IDH, lo ha sostenido el derecho fundamental a la vida comprende no sólo el derecho de todo ser humano de no ser privado de la vida arbitrariamente, sino también el derecho a que no se le impida el acceso a las condiciones que le garanticen una existencia digna. Los Estados tienen la obligación de garantizar la creación de las condiciones que se requieran para que no se produzcan violaciones de ese derecho básico y, en particular, el deber de impedir que sus agentes atenten contra él<sup>14</sup>.

Del contenido del artículo 4 de la Convención se desprende la obligación de los Estados partes, de adoptar las medidas necesarias para proteger y garantizar el derecho a la vida, así como que ninguna persona sea privada de su vida arbitrariamente. Como ha sostenido la Corte IDH, precisamente en un caso de nuestro país, el deber de proteger la vida humana- protección activa- del derecho a la vida por parte del Estado no sólo involucra a los legisladores, sino a toda institución estatal, y a quienes deben resguardar la seguridad, sean éstas sus fuerzas de policía y a sus fuerzas armadas. En razón de lo anterior, los Estados deben tomar las medidas necesarias, no sólo para prevenir y castigar la privación de la vida como consecuencia de actos criminales, sino también prevenir las ejecuciones arbitrarias por parte de sus propias fuerzas de seguridad<sup>15</sup>.

En la misma sentencia la Corte IDH, ha manifestado que al Estado como garante del derecho a la vida se le impone la prevención para en aquellas situaciones, que pudieran conducir, incluso por acción u omisión a la supresión de la inviolabilidad del derecho a la vida. En este sentido, si una persona fuera detenida en buen estado de salud y posteriormente, muriera, recae en el Estado la obligación de proveer una explicación satisfactoria y convincente de lo sucedido y desvirtuar las alegaciones sobre su responsabilidad, mediante elementos probatorios válidos, ya que en su condición de garante el Estado tiene tanto la responsabilidad de garantizar los derechos del individuo bajo su custodia como la de proveer la información y las pruebas relacionadas con el destino que ha tenido la persona detenida<sup>16</sup>.

El Estado considera que, en el presente caso sometido a la jurisdicción de la Corte IDH, no existen elementos que puedan atribuir la responsabilidad que los peticionarios alegaron con *posterioridad* al informe de admisibilidad aduciendo que el Estado es responsable de la violación del derecho a la vida, establecido en el artículo 4 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento, en perjuicio del señor Ángel Pacheco León.

<sup>14</sup> Corte IDH Caso de los (niños de la calle) Villagrán Morales y otros Vs. Guatemala Sentencia de 19 de noviembre de 1999. Párrafo. 144.

<sup>15</sup> Corte IDH Caso Juan Humberto Sánchez Vs. Honduras Sentencia de 7 de junio de 2003. Párrafo 110.

<sup>16</sup> Ibidem Párrafo 111.





*Procuraduría General de la República*  
*República de Honduras*

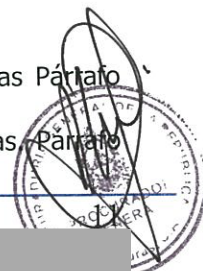
La Comisión en su Informe de Fondo ha dado por probado que Ángel Pacheco León fue asesinado el 23 de noviembre de 2001, tras sufrir un atentado con arma de fuego por parte de una persona. Asimismo, "la CIDH observa que no existe controversia entre las partes respecto de la afectación a la vida como consecuencia del atentado sino respecto de si tales hechos resultan atribuibles al Estado"<sup>17</sup>. La responsabilidad que se le pretende atribuir al Estado en el presente caso no se encuentra relacionada en evidencia que haga suponer racionalmente que el lamentable suceso, en el que perdió la vida el señor Ángel Pacheco León, responda a un caso en el cual se pueda evidenciar alguna actuación o patrón de ejecución extrajudicial tolerado, permitido o impulsado por el Estado. Tampoco existió ninguna detención previa por autoridad policial alguna sobre la víctima, antes de su muerte.

El Estado de Honduras, tampoco incumplió su obligación de prevenir la muerte del señor Pacheco León, ya que no existió ninguna denuncia previa, interpuesta ante órgano estatal competente en la que él hubiese puesto en conocimiento las amenazas recibidas. Al respecto, la Comisión ha reconocido que "no consta en el expediente denuncia ante autoridades estatales de amenazas recibidas, de una situación de riesgo o de la necesidad de contar con medidas de protección a favor del señor Pacheco León. De esta forma, la Comisión considera que en el presente caso no puede afirmarse la existencia de un riesgo que el Estado sabía o debía saber respecto de Ángel Pacheco"<sup>18</sup>.

En relación a la supuesta participación de agentes estatales, señalándose al señor Juan José Quiroz, en ese entonces alcalde de Amapala en el Departamento de Valle, y a los señores Manuel Vides y Raúl Pino, como posibles responsables intelectuales de la muerte del señor Pacheco León, no existen indicios que indiquen con inferencia racional esa participación, la cual se supone motivada por diferencias de orden político con la víctima, dadas las controversias surgidas por las aspiraciones de éste, para convertirse en Diputado por el Departamento de Valle; diferencias que de haber existido, tendrían que entenderse como controversias de tipo político partidarias en los intereses personales de los mencionados y del señor Pacheco León. Diferencias políticas que, no pueden atribuirse en condición de agentes del Estado, no obstante, los cargos de orden político que desempeñaban, pues los mismos no habrían sido un medio necesario para la ejecución del hecho de dar muerte al señor Pacheco León, de haber sido éstos los responsables. Es importante manifestar, que el Estado continúa

<sup>17</sup> Informe de Fondo No. 49/15 caso 12.585 Ángel Pacheco León y Familia vs Honduras *Parrafo* 125.

<sup>18</sup> Informe de Fondo No. 49/15 caso 12.585 Ángel Pacheco León y Familia vs Honduras *Parrafo* 131.





*Procuraduría General de la República*  
*República de Honduras*

realizando las investigaciones para esclarecer los hechos como se hace referencia en la presente contestación.

Concerniente al agente policial Santos Mendoza, al cual la CIDH menciona como "presunto autor material". Señalando: *"Con respecto al agente policial Santos Mendoza, la CIDH observa que éste fue identificado como presunto autor material luego de menos de una semana de la muerte del señor Pacheco por parte de la coordinadora interina de la DGIC. No obstante, la Comisión nota que del expediente no se observa ninguna diligencia destinada a identificar su responsabilidad penal, incluyendo la toma de su declaración, la realización de diligencias en el cuartel donde trabajaba, entre otras. Únicamente figura un informe de 2010 de un fiscal indicando que "se continúa manejando como hipótesis única que el autor ejecutivo del crimen fue un policía preventivo"*<sup>19</sup>.

En cuanto al referido agente policial Santos Lorenzo Mendoza Cáceres, se le tomaron dos declaraciones; una en fecha 30 de septiembre de 2004, y otra el 11 de enero de 2008, ambas en la Dirección General de Investigación Criminal (DGIC).<sup>20</sup> Por lo cual se muestra que si se realizaron diligencias investigativas en relación al mencionado agente policial.

En consecuencia, de lo antes expuesto, a la luz de la Convención Americana y las interpretaciones de la Corte IDH., no es procedente responsabilizar el Estado por la muerte del señor Pacheco León.

### 1. Artículo 23: Derechos Políticos

El *corpus iure* regional en materia de derechos humanos regula a través de la CADH en su artículo 23 los derechos políticos de la manera siguiente:

- "1. Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades:*
- a) de participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos;*
  - b) de votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores, y*
  - c) de tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país.*

<sup>19</sup> Ibidem Párrafo No. 99.

<sup>20</sup> Vid. Declaraciones rendidas por el señor Santos Lorenzo Mendoza Cáceres ante la Dirección General de Investigación Criminal (DGIC) Anexo 3 Folio 12.





*Procuraduría General de la República*  
*República de Honduras*

2. *La ley puede reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades a que se refiere el inciso anterior, exclusivamente por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental, o condena, por juez competente, en proceso penal.*"

En cuanto a las argumentaciones formuladas por la CIDH en su Informe de Fondo, afirmando que debido a las supuestas presiones de que fue objeto el señor Pacheco León, a la falta de investigación seria y diligente sobre las mismas y bajo la misma línea de análisis respecto al derecho a la vida, debe de declararse la responsabilidad internacional del Estado de Honduras.<sup>21</sup> En similar sentido, los peticionarios también alegan la violación a este derecho en virtud de las múltiples amenazas e irregularidades en las investigaciones, así como la falta de persecución criminal en contra de los presuntos responsables, como las causas para considerar la responsabilidad internacional del Estado<sup>22</sup>.

Al respecto de las anteriores afirmaciones, el Estado de Honduras sostiene que las posturas de la CIDH y de las presuntas víctimas no son acordes a la amplia Jurisprudencia de la Corte IDH, en tanto, los hechos del caso utilizado como precedente por las presuntas víctimas, como ser: "*Manuel Cepeda Vargas vs. Colombia*", son diferentes a los del caso que nos ocupa<sup>23</sup> y, por tanto, su antecedente jurisprudencial no es aplicable o más aun el caso: "*Yatama vs. Nicaragua*", citado por la CIDH en su informe de fondo, ya que éste es referente a la no inscripción de una nómina municipal<sup>24</sup>.

A *contrario sensu*, el antecedente jurisprudencial, aplicable en lo que respecta a los derechos políticos es el del caso: "*Escue Zapata vs. Colombia*"<sup>25</sup>, pues los hechos de este caso se ajustan en mayor medida a los del caso *sub judice*. En tal sentido, el Estado de Honduras solicita tener por desestimados los antecedentes jurisprudenciales citados, tanto por la CIDH y por las presuntas víctimas en lo que respecta a los derechos políticos y, que al momento de elaborar su sentencia, tome en consideración el caso: "*Escue Zapata vs. Colombia*", por ser el que corresponde en mayor medida al caso en debate.

<sup>21</sup> Informe de Fondo No. 49/15 caso 12.585 Ángel Pacheco León y Familia vs Honduras. párrafo 144-146

<sup>22</sup> Vid. Escrito de solicitudes, argumentos y pruebas (ESAP) 18 de marzo de 2016 COFADEH pág. 58.

<sup>23</sup> Corte IDH Caso Manuel Cepeda Vargas vs. Colombia Sentencia de 26 de mayo de 2010 párrafo 2.

<sup>24</sup> Corte IDH Caso Yatama vs. Nicaragua Sentencia de 23 de junio de 2005 párrafo. 2

<sup>25</sup> Corte IDH Caso Escué Zapata vs. Colombia Sentencia de 4 de Julio de 2007 párrafos. 118-125





*Procuraduría General de la República*  
*República de Honduras*

A la luz de la CADH y de las múltiples interpretaciones que esta Corte ha brindado, en casos como: "Bamaca Velásquez vs. Guatemala", "La Cantuta vs. Perú"<sup>26</sup> y "Escue Zapata vs. Colombia", donde textualmente señaló: "la privación arbitraria de la vida suprime a la persona humana, y, por consiguiente, no procede, en esta circunstancia, invocar la supuesta violación [...] de otros derechos consagrados en la Convención Americana."<sup>27</sup> Por tanto, los alegatos esgrimidos por la CIDH y las presuntas víctimas pierden validez con la muerte del señor Ángel Pacheco León, ya que de acuerdo a las interpretaciones de la Corte IDH, sería "improcedente" alegar la violación a este derecho, pues él nunca actuó como Diputado y, menos aún, se cometieron arbitrariedades al momento de su inscripción.

Así mismo, la Corte IDH ha analizado el artículo 23 en función del sufragio pasivo en casos como: "Yatama vs. Nicaragua" y "López Mendoza vs. Venezuela" en donde se negó el acceso a los aspirantes a cargos públicos,<sup>28</sup> hechos que son completamente distintos a los del caso que nos ocupa, pues como se ha mencionado el señor Pacheco León fue inscrito como primer candidato a Diputado por el Departamento de Valle en elecciones generales; y a raíz de su fallecimiento, el Partido político que representaba designó a su hermano José Pacheco para que tomara su lugar como Diputado<sup>29</sup>.

En tal sentido, a la luz de los antecedentes jurisprudenciales señalados, y de los argumentos presentados por esta representación, se solicita que no se declare la responsabilidad internacional del Estado de Honduras por la vulneración al art. 23 de la CADH.

## 2. Artículos 8 y 25: Garantías Judiciales y Protección Judicial

En relación a la supuesta violación de los artículos precedentes, el Estado refuta que el caso ha permanecido inactivo, en tanto que el Ministerio Público debe de actuar en forma objetiva y responsable y no puede presentar acusación contra personas o aseverar que existen "estructuras de poder"<sup>30</sup>, por el solo hecho que se les considere que son sospechosos de haber cometido un delito, cuando no existen indicios suficientes a pesar de las múltiples diligencias realizadas, que lleven al Ministerio Público a probar tal extremo; pues, la obligación de investigar no es la

<sup>26</sup> Corte IDH Caso Bámaca Velásquez vs. Guatemala Sentencia de 25 de noviembre de 2000 párrafo. 180. Corte IDH Caso La Cantuta vs. Perú Sentencia de 29 de noviembre de 2006 párrafo. 119.

<sup>27</sup> Corte IDH Caso Escué Zapata vs. Colombia Sentencia de 4 de Julio de 2007 párrafo.122

<sup>28</sup> Corte IDH Caso Yatama vs. Nicaragua Sentencia de 23 de junio de 2005 párrafos. 199, 200 y 219. Corte IDH Caso López Mendoza vs. Venezuela Sentencia de 1 de septiembre de 2011 párrafo 104

<sup>29</sup> Vid. Escrito de solicitudes, argumentos y pruebas (ESAP) 18 de marzo de 2016 COFADEH pág. 86

<sup>30</sup> Informe de Fondo No. 49/15 caso 12.585 Ángel Pacheco León y Familia vs Honduras Párrafos 97 y 139.





*Procuraduría General de la República*  
*República de Honduras*

obtención de sentencias condenatorias sino el esclarecimiento de la verdad de los hechos hasta donde es posible, utilizando las herramientas de que se dispone.

En ese sentido, el Estado de Honduras es consciente que la debida diligencia, exige que el órgano que investiga lleve a cabo todas aquellas actuaciones y averiguaciones necesarias para procurar el resultado que se persigue, y como señala la Corte en relación con los casos de muerte violenta, "las autoridades estatales que conducen una investigación de este tipo deben intentar como mínimo, *inter alia*:

- 1) identificar a la víctima;
- 2) recuperar y preservar el material probatorio relacionado con la muerte, con el fin de ayudar en cualquier potencial investigación penal de los responsables;
- 3) identificar posibles testigos y obtener sus declaraciones en relación con la muerte que se investiga;
- 4) determinar la causa, forma, lugar y momento de la muerte, así como cualquier patrón o práctica que pueda haber causado la muerte, y
- 5) distinguir entre muerte natural, muerte accidental, suicidio y homicidio.

Además, es necesario investigar exhaustivamente la escena del crimen, se deben realizar autopsias y análisis de restos humanos en forma rigurosa, por profesionales competentes y empleando los procedimientos más apropiados<sup>31</sup>.

Todo lo anterior, ha sido realizado en el presente caso y continuará, lo cual, ha sido del conocimiento de las supuestas víctimas, particularmente del señor Jimmy Javier Pacheco, hijo del señor Ángel Pacheco León y único testigo presencial del hecho, quien ha estado muy cerca en el seguimiento de las investigaciones.

Como bien lo ha indicado la misma Corte, el deber de investigar es una obligación de medio o comportamiento y, no de resultados, por lo que no se consideraría incumplida por el solo hecho de que la investigación no produzca un resultado satisfactorio aún, tal como lo señala en su jurisprudencia<sup>32</sup>, así como en mayor detalle quedó plasmado en el Voto Concurrente Del Juez *Ad Hoc* Diego Eduardo López Medina en la Sentencia del 5 de mayo de 2008 en el Caso *Escué Zapata Vs.*

<sup>31</sup> Corte IDH. Caso Garibaldi vs. Brasil. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 23 de septiembre de 2009, párrafo 115; y Caso Escué Zapata vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 4 de julio de 2007, párrafo 106.

<sup>32</sup> Corte IDH. Caso Heliodoro Portugal vs. Panamá. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 12 de agosto de 2008, párrafo 144; Caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras. Fondo. Sentencia de 29 de julio de 1988, párrafo 177; Caso García Prieto y otros vs. El Salvador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 20 de noviembre de 2007, párrafo 100, Caso Cantoral Huamaní y García Santa Cruz vs. Perú. Excepción Preliminar Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 10 de julio de 2007, párrafo 131 y Caso Baldeón García vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de abril de 2006, párrafo 93.





*Procuraduría General de la República*  
*República de Honduras*

*Colombia*, en relación con la obligación de investigar que tienen los Estados, en la forma siguiente: "...en categorías clásicas del derecho<sup>33</sup>, puede decirse que esta obligación es de medio (o de actividad, también llamada de due diligence) y no de resultado (u obra) porque la imposición de condenas efectivas depende de una serie de variables sustantivas, probatorias y procesales que ningún Estado puede garantizar, ni siquiera aquellos que adelantan de buena fe y con altísima diligencia la investigación de conductas penales violatorias de los derechos humanos. La más eficaz de las maquinarias de justicia no puede, ni debe garantizar que para todos los casos de violación del derecho penal interno se obtendrá la individualización y sanción de sus autores. Tal reducción absoluta de la impunidad es imposible e indeseable porque, en el marco normal de las instituciones humanas apuntaría, no tanto a un nuevo y quizás inimaginable grado de perfección en las técnicas de investigación del delito, sino más bien a violaciones masivas de garantías procesales y otros derechos fundamentales.

Esta aspiración de eliminación absoluta de la impunidad, en la que mágicamente se reduce el espacio entre el "deber ser" normativo y el "ser" de las conductas sociales, ha sido espacio fértil para diversas formas de autoritarismo penal que el sistema interamericano no prohíbe bajo los artículos 8 y 25 de la Convención."

En consecuencia, el Estado de Honduras rechaza la vulneración de los derechos contemplados en los artículos 8 y 25 de la Convención Americana, por las afirmaciones antes referidas, y de igual forma lo expuesto en el Capítulo de los Antecedentes numeral 2: Diligencias de investigación y procedimientos judiciales realizados.

#### **4.- Artículo 5.1: Derecho a la Integridad Personal**

*"1. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral."*

Consagrado en forma expresa en el Artículo 5.1 de la Convención Americana, también encuentra regulada su protección en nuestra Constitución Política, estableciendo, además, la prohibición de la tortura y el derecho de toda persona privada de su libertad a serle concedido un trato humanitario, entre otros.<sup>34</sup>

<sup>33</sup> Esta distinción proviene originalmente del derecho civil pero ha tenido también amplia aplicación en derecho internacional: vid. Pierre-Marie Dupuy, *Reviewing the Difficulties of Codification: On Ago's Classification of Obligations of Means and Obligations of Result in Relation to State Responsibility*. *European Journal of International Law*, Vol. 10, pags. 371-385 (1999). Cfr. también Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Fondo. Sentencia de 29 de julio de 1988. Serie C No. 16, párrafo. 175.

<sup>34</sup> Constitución de la República de Honduras de 1982. Artículo 68.







*Procuraduría General de la República*  
*República de Honduras*

Por su parte, el Artículo en referencia, establece la protección de la integridad de las personas en tres niveles: integridad física, referida a la conservación de todas las partes del cuerpo; integridad psíquica, que significa la conservación de todas las habilidades motrices, emocionales e intelectuales de la persona; y, la integridad moral, relativa al derecho de cada ser humano a desarrollar su vida conforme sus convicciones.

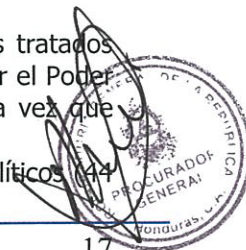
En ese contexto, el Estado reitera que su legislación interna cumple con todos los elementos anteriormente enunciados, al contemplar la protección de este derecho desde la propia Constitución, la cual establece en su Artículo 68: "Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica, y moral. Nadie debe ser sometido a tortura, ni pena o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano." Además, el Estado de Honduras está obligado por los instrumentos internacionales que establecen la obligación estatal de protección del derecho a la vida y a la integridad personal, entre otros, considerados, asimismo, leyes nacionales, de acuerdo con el Artículo 16, párrafo 2 del ordenamiento constitucional.<sup>35</sup>

De igual manera, el Estado reconoce la obligación de garantizar los derechos prescritos en la Convención Americana. Obligación con efectos *erga omnes*, no solo respecto a los Estados, sino también frente a terceros y particulares. Por ende, el derecho a la integridad personal, que supone que nadie puede ser lesionado o agredido físicamente, ni ser víctima de daños mentales o morales, es, por tanto, un derecho fundamental y absoluto. Aspecto que lo reafirma el Comité de Derechos Humanos, al destacar que la prohibición de someter a una persona a torturas o a cualquier pena o trato cruel, inhumano o degradante no admite limitación alguna<sup>36</sup>.

En cuanto a los señalamientos imputables a los Estados, en los casos donde existió una falta de investigación completa y efectiva, según lo manifestado por la Comisión Interamericana, la Jurisprudencia de la Corte Interamericana considera que "...la ausencia de una investigación completa y efectiva sobre los hechos constituye una fuente de sufrimiento y angustia adicional para las víctimas y sus familiares, quienes tiene el derecho de conocer la verdad de lo ocurrido. Dicho derecho a la verdad exige la determinación procesal de la más completa verdad histórica posible, lo cual incluye la determinación judicial de los patrones de

<sup>35</sup> Constitución de la Republica de Honduras de 1982. Artículo 16, párrafo 2: Todos los tratados internacionales deben ser aprobados por el Congreso Nacional antes de su ratificación por el Poder Ejecutivo. Los tratados internacionales celebrados por Honduras con otros Estados, una vez que entran en vigor, forman parte del derecho interno."

<sup>36</sup> Observación General No.20- Artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (44 periodo de sesiones, 1992), párrafo. 3.





*Procuraduría General de la República*  
*República de Honduras*

actuación conjunta y de todas las personas que de diversas formas participaron en dichas violaciones y sus correspondientes responsabilidades”<sup>37</sup>.

Es evidente que la responsabilidad del Estado, comprende no solo el respeto a tales derechos, sino que, además debe adoptar todas las medidas apropiadas para garantizarlos, en cumplimiento de su deber general establecido en el Artículo 1.1 de la CIDH.<sup>38</sup> De acuerdo con esta amplia interpretación, las obligaciones estatales frente a este derecho, lo conduce a prevenir, investigar, procesar, sancionar y reparar las violaciones a estos derechos.

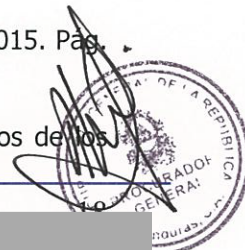
**La obligación de prevenir.** De las obligaciones primordiales que establece la Convención Americana en relación con el derecho a la vida y a la integridad personal se desprende este deber, y, si bien la jurisprudencia de la Corte Interamericana enfatiza que: “En el plano de la responsabilidad internacional, toda violación de derechos que realicen los particulares serán imputables al Estado en el caso de no haber tomado medidas eficaces para prevenir tal violación o por tolerarla o por permitir la impunidad para sus autores”<sup>39</sup>. Al respecto, es preciso reiterar que el señor Ángel Pacheco León o familiar cercano alguno, antes de lo acontecido el veintitrés (23) de noviembre de dos mil uno (2001), no procedió a denunciar ante las autoridades competentes, las amenazas de que estaba siendo objeto o solicitó medidas de protección a su favor.

Consecuentemente, la responsabilidad del Estado de Honduras concerniente al cumplimiento del “deber de prevenir”, no es admisible, por cuanto se puede afirmar que esa situación personal de riesgo real del señor Pacheco León, era desconocida totalmente por las autoridades gubernamentales. También, la jurisprudencia de la Corte Interamericana ha determinado que: “Un Estado no puede ser responsable por cualquier violación de derechos humanos cometida entre particulares dentro de su jurisdicción. En efecto, el carácter *erga omnes* de las obligaciones convencionales de garantías a cargo de los Estados no implica una responsabilidad ilimitada de los Estados frente a cualquier acto o hecho de particulares, pues sus deberes de adoptar medidas de prevención y protección de los particulares en sus relaciones entre sí, se encuentran condicionados al conocimiento de una situación de riesgo real e inmediato para un individuo o grupo de individuos determinado y a las posibilidades razonables de prevenir o evitar ese riesgo. Es decir, aunque un acto, omisión o hecho de un particular tenga como consecuencia jurídica la violación de determinados derechos humanos de otro particular, aquel no es automáticamente atribuible al Estado, pues debe

<sup>37</sup> Informe de Fondo No.49/15. Caso 12.585, Ángel Pacheco León y Familia. 28 de julio 2015. Pág. 29, párrafo. 149.

<sup>38</sup> Corte IDH. Caso “Instituto de Reeducción del Menor Vs. Paraguay”. Párrafo. 157.

<sup>39</sup> Voto Concurrente del Juez Salgado Pesantes, Corte IHD. Condición Jurídica y Derechos de los Migrantes Indocumentados. Opinión Consultiva OC-18/03 del 17 de septiembre de 2013.





*Procuraduría General de la República*  
*República de Honduras*

atenderse a las circunstancias particulares del caso y a la concreción de dichas obligaciones de garantías<sup>40</sup>.

Concluyendo, y a ese efecto se reitera, en virtud de lo anterior, que la Comisión considera "que no cuenta con elementos suficientes para atribuir responsabilidad al Estado por incumplimiento del deber de prevención"<sup>41</sup>.

**Obligación de investigar, procesar y sancionar.** De acuerdo con lo prescrito en la Convención Americana y la Jurisprudencia de ese Honorable Tribunal, esta obligación del Estado en relación con este derecho, debe ser promovida con seriedad y no como una simple formalidad. Advirtiéndose, que esta obligación es un deber jurídico propio, que debe cumplirse, cualquiera que sea el agente al cual pueda eventualmente atribuirse la violación, aun los particulares, dado que, si sus hechos no son investigados con seriedad, implicaría de cierta manera, el respaldo del poder público, lo que comprometería la responsabilidad internacional del Estado<sup>42</sup>.

Habida cuenta de lo anterior, la Corte Interamericana también ha manifestado que la obligación de investigar es una obligación de medio o comportamiento y no de resultado, lo que significa que el Estado cumple con esta obligación cuando realiza todas las acciones necesarias para averiguar la verdad de lo ocurrido, recurriendo a todos los medios a su alcance, reiterando que: "En ciertas circunstancias puede resultar difícil la investigación de hechos que atenten contra derechos de la persona. La de investigar es, como la de prevenir una obligación de medio o comportamiento que no es incumplida por el solo hecho de que la investigación no produzca un resultado satisfactorio"<sup>43</sup>.

Tras ese propósito, el Estado ha procurado realizar una investigación seria, imparcial y exhaustiva, así como se han expuesto en el capítulo anterior las líneas de investigación que se han efectuado, desde el inicio de las mismas para encontrar a los responsables del homicidio de Ángel Pacheco León.

Por lo que, en lo referente a las supuestas violaciones a los derechos de los familiares de Ángel Pacheco León, enunciadas tanto por la Comisión Interamericana en su Demanda, como por los peticionarios en su escrito de

<sup>40</sup> Corte I.D.H., Caso de: la Masacre de Pueblo Bello Vs. Colombia. Sentencia de 31 de enero de 2006. Serie C No. 140. párrafo. 123

<sup>41</sup> Informe de Fondo No. 49/15 caso 12.585 Ángel Pacheco León y Familia vs Honduras. Pág. 26, párrafo. 131.

<sup>42</sup> Corte IDH. Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Fondo. Sentencia de 29 de julio de 1988. Serie C No.4. Párrafo. 177.

<sup>43</sup> Corte IDH. Caso Caballero Delgado y Santana Vs. Colombia. Fondo. Sentencia de 8 de diciembre de 1995. Serie C No.22. Párrafo. 58.





*Procuraduría General de la República*  
*República de Honduras*

solicitudes, argumentos y pruebas, el Estado de Honduras si bien puede reconocer que han surgido dificultades que han demorado el proceso de investigación del caso *sub judice*, no puede aceptar, que esto haya generado las supuestas violaciones a sus familiares, debido a que no existe prueba alguna de que hayan surgido amenazas o que estas fueran denunciadas por los familiares de la víctima.

No está de más manifestar, que toda pérdida humana, afecta psíquica y moralmente a sus familiares; pero concluir que el Estado debe asumir la total responsabilidad por un hecho, sobre el cual se ignoraban los pormenores de las controversias surgidas entre particulares, a causa de las diferencias políticas que manejaban, previo al proceso electoral hondureño de 2001, resulta inconsistente. Si bien es cierto, que en este caso se trató de un asesinato que irrumpió excepcionalmente un proyecto de vida; no se puede culpar al Estado de las afectaciones psíquicas y morales de los familiares de Pacheco León, pues no se pudo comprobar que ellos estaban siendo amenazados por terceras personas.

En consecuencia, al Estado de Honduras no se le puede calificar responsable de violación al artículo 5.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en perjuicio de los familiares de la víctima. Por tanto, se objeta lo expresado, en los términos descritos por la Comisión Interamericana en el párrafo 153 de su Demanda.

#### IV. DE LAS REPARACIONES.

La violación de los derechos fundamentales de las personas, deviene para los Estados parte del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, la obligación jurídica, que consiste en el otorgamiento de las medidas de reparación adecuadas. En este ámbito, los artículos 63.1 de la Convención Americana y el 31 del Reglamento de la Corte, constituyen la base convencional de esa obligación. Tanto así, que en la jurisprudencia de ese alto Tribunal se ha establecido de forma reiterada que las reparaciones son las medidas a través de las cuales se pretenden atenuar, de manera adecuada, los efectos de las violaciones ejecutadas, siendo que su naturaleza y monto están determinados por el daño ocasionado y en relación directa con las violaciones cometidas.

Por consiguiente, el Estado de Honduras, acepta que toda violación a una obligación internacional que genere un daño, crea la obligación de conceder una reparación adecuada a dicho daño, estimada sobre una base equitativa y teniendo en cuenta la conexión suficiente con los resultados alcanzados.





*Procuraduría General de la República*  
*República de Honduras*

En ese sentido, se entiende que jurídicamente el Estado no está exento de la aplicación de aquellas medidas que buscan compensar los daños sufridos por los familiares cercanos de la víctima, conforme la equidad. Sin embargo, es importante, determinar el alcance y los términos de las medidas de reparación. Porque si bien las reparaciones a violaciones a derechos humanos deben ser integrales, esto no conlleva a que se deba dar una doble reparación por cada violación, es decir, a cada hecho ilícito corresponde una medida de reparación adecuada.

Es así, que la prohibición a una doble reparación fue reiterada por la Corte Internacional de Justicia en la Opinión Consultiva: *Reparation for Injuries Suffered in the Service of the United Nations*, en donde la CIJ manifestó que: "Although the bases of the two claims are different, that does not mean that the defendant State can be compelled to pay the reparation due in respect of the damage twice over."<sup>44</sup> Ello implica que para que haya una reparación, no es necesario dar todas las medidas derivadas del Artículo 63.1 de la Convención Americana.

Todo esto resulta relevante en el caso *sub judice*, dado que, en el escrito de solicitudes, argumentos y pruebas (ESAP) presentado por los peticionarios, las medidas de reparación solicitadas son excesivas, reiterativas y constituyen una solicitud de doble reparación al referirse muchas de ellas a los mismos conceptos de violación.

Por lo que no se considera lícito que se pretenda otorgar más de lo recibido a los familiares de la víctima, en base a la situación que generó su asesinato; cuando no es un hecho controvertido, que, como resultado de las elecciones generales, su hermano José Pacheco León lo subrogó en el cargo de elección, obteniendo durante cuatro años los beneficios derivados del mismo. Por lo que se agrega, que no puede lo rebatido en el presente caso, conducir al otorgamiento de una doble reparación a los familiares del señor Ángel Pacheco León.

## V. CONCLUSIONES

El Estado de Honduras, ante lo expuesto por la CIDH y los Representantes de los peticionarios, reafirma, que no se han vulnerado los derechos consignados en el escrito de presentación del Caso; no resulta justo o conforme a derecho, que se pretenda responsabilizar al Estado, por el hecho cometido en perjuicio del señor

<sup>44</sup> "Aunque las bases de las dos pretensiones son diferentes, ello no significa que el Estado abusado pueda estar obligado a pagar reparaciones por el daño dos veces." *Reparation for Injuries Suffered in the Service of the United Nations (Advisory Opinion) ICJ Rep. [1949] pág. 186.*





*Procuraduría General de la República*  
*República de Honduras*

Ángel Pacheco León y la supuesta situación de indefensión que alegan los familiares de la víctima.

El alcance de las conclusiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en su Informe de Fondo No. 49/15 del 28 de julio de 2015 y del escrito de 18 de marzo de 2016, mediante el cual los representantes de las supuestas víctimas en este Caso presentaron sus solicitudes, argumentos y pruebas (ESAP), se estima que no son admisibles totalmente, dado el carácter absoluto de sus argumentaciones, que pretenden colocarnos en detrimento frente al sistema de protección de los derechos humanos regional. Sin embargo, las presuntas víctimas han sido escuchados y actuado en el transcurso de este proceso, en procura del esclarecimiento del hecho cometido; de tal manera, que no se les ha sustraído de la protección de la ley o despojado de los derechos y garantías inherentes al ser humano; estimando que el Estado, aun con ciertas limitaciones, se ha conducido imparcialmente en el procedimiento establecido al efecto, permitiendo el ejercicio pleno de sus derechos.

En cuanto a la presunción *Iuris Tantum*<sup>45</sup> aplicada por la Honorable Corte IDH sobre la reacción natural de los familiares del señor Pacheco León causada por la alegada supuesta falta de investigación y negación de justicia; cabe retomar el hecho que el ente investigativo ha realizado una serie de diligencias encaminadas al esclarecimiento de los hechos durante estos años, diligencias que han orientado el curso de la investigación. Sin embargo, ante la complejidad del caso (diversidad de hipótesis, de sospechosos e imputados, reducidos testigos presenciales del hecho, manejo inadecuado de la escena de crimen no imputable al Estado), no se cuenta aún con elementos de prueba que permitan demostrar quienes serían los autores materiales e intelectuales de dicho crimen, a pesar que el Ministerio Público se ha interesado en realizar diversas diligencias de investigación. Reiterando que aun el Estado prosigue su labor de investigación para determinar la verdad sobre el hecho acaecido.

En cuanto a la valoración que se ha formulado, tanto por la CIDH como por los representantes de las supuestas víctimas, sobre las pretendidas violaciones de los derechos alegados de la Convención Americana, disentimos rotundamente con la posición que han expuesto, concerniente a la indemnización por los salarios que el señor Ángel Pacheco León hubiera devengado como Diputado, pues no es razonable solicitar una indemnización por ello, cuando él no se desempeñó como tal y, como se mencionó *ut supra*, al existir una privación de la vida no es

<sup>45</sup> Corte IDH Caso de la Masacre de la Rochela vs Colombia párrafo. 137; Corte IDH Caso Escué Zapata vs Colombia párrafo. 77; Caso Albán Cornejo y otros vs Ecuador, párrafo. 46; Corte IDH Caso Valle Jaramillo y otros vs Colombia párrafo. 119; Corte IDH Caso Ticona Estrada y otros vs Bolivia párrafo. 88; y, Corte IDH Caso Kawas Fernández, vs Honduras párrafo. 128, Corte IDH Caso Luna López vs Honduras párrafo. 202.





*Procuraduría General de la República*  
*República de Honduras*

procedente invocar la supuesta violación de otros derechos consagrados en la CADH; es así que, por un lado, siguiendo una línea lógica de análisis, no se puede solicitar la restitución o indemnización de un derecho (el pago) que nunca recibió y menos aún derechos derivados de ese pago<sup>46</sup> y, por otro lado, hacer una solicitud de esta naturaleza, es contradictorio e injusto ya que su hermano José Pacheco ocupó su lugar, con los beneficios económicos<sup>47</sup> del caso.

Y, en cuanto a la responsabilidad que extensamente han imputado al Estado de Honduras, al ampliar el ámbito de obligaciones, respecto al amparo que se ha pretendido otorgar a todo el círculo familiar del señor Pacheco León, ello implicaría gravar este caso, con decisiones que no tienen asidero jurídico, pretextando justificar las supuestas violaciones sobre aspectos que no afectan a todas las aparentes víctimas. De igual manera, no puede considerarse en las mismas condiciones a todas las supuestas víctimas, pues unas residen en el país y mantienen un vínculo más cercano al núcleo familiar, que las que se encuentran en el exterior, por lo cual se podría determinar una mayor afectación de unos en relación con otros. Considerar que a todos los peticionarios les corresponde beneficiarse de las consecuencias del hecho acaecido, resulta excesivo y contrario al principio de equidad pregonado por la Corte Interamericana

No está de más mencionar, que el Estado manifestó a los familiares del señor Pacheco León su interés de lograr un acuerdo de solución amistosa, conforme a los artículos 48.1 inciso f, y 49 de la Convención Americana, con el propósito de superar la controversia del caso sub judice. Sin embargo, fue rechazado por los representantes legales de las supuestas víctimas, dando por concluido este proceso<sup>48</sup>.

Por lo que se pide que se analicen en todo su contexto las pretensiones planteadas por las supuestas víctimas, a efecto de alcanzar una decisión ecuaníme, en estricto apego al espíritu de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

<sup>46</sup> Vid. Escrito de solicitudes, argumentos y pruebas (ESAP) 18 de marzo de 2016 COFADEH pág. 86 y 87

<sup>47</sup> Vid. Nota de fecha 5 de julio de 2016 emitida por el licenciado Carlos Roberto Avilés, gerente financiero del Congreso Nacional de la República en el cual se detalla las cantidades devengadas por el señor José Pacheco, ex diputado propietario por el departamento de Valle, en el periodo 2002-2006. Anexo 3 Folio 50.

<sup>48</sup> Vid. Nota de fecha 17 de septiembre de 2015 remitida al abogado Emilio Álvarez Icaza en su condición de Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por parte del Abogado Jorge Abilio Serrano Villanueva en su condición de Sub-Procurador General de la República y agente alterno del Estado de Honduras. Nota de fecha 12 de octubre 2015 remitida al abogado Emilio Álvarez Icaza en su condición de Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por parte de la señora Berta Oliva de Nativí en su condición de coordinadora del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras Anexo 3, folio 42 y 43.





*Procuraduría General de la República*  
*República de Honduras*

**VI. RESPALDO PROBATORIO**

**Prueba Documental.**

El **Anexo 1** consiste en el tomo I del expediente del Ministerio Público 2748-01 en las diligencias del caso del Asesinato de Ángel Pacheco León. Dicho anexo consta de 160 folios útiles. Dentro de los documentos citados en pie de página, se encuentran:

1. Detalle de llamadas telefónicas de la empresa "Telefónica Celular" CELTEL de fecha 23 de noviembre de 2001. Anexo 3 Folio 01 o Anexo 1 folio 123 hasta el Folio 131
2. Transcripción de Dictamen a solicitud del Lic. Ramón Abraham Cruz Hernández Coordinador de la Fiscalía de Nacaome Valle de fecha 30 de noviembre de 2001 Anexo 2 folio 225, o Anexo 1 Folio 132

El **Anexo 2** consiste en el tomo II del expediente del Ministerio Público 2748-01 en las diligencias del caso del Asesinato de Ángel Pacheco León. Dicho anexo consta de los folios 161 hasta el folio 394 (161-394). Dentro de los documentos citados en pie de página, se encuentran:

3. "POR CUANTO" del Juzgado de Letras Seccional de Nacaome Departamento de Valle de fecha 24 de noviembre de 2001 Anexo No. 2, folio 166.
4. Solicitud de Allanamiento presentado por el abogado Ramón Abraham Hernández Cruz en su condición de Fiscal del Ministerio Público en Juzgado de Letras Seccional de Nacaome, depto. de Valle de fecha 24 de enero de 2002 (consta en el folio 288 del anexo 2) y ejecutado en fecha 25 de enero de 2002, Anexo 2 Folio 292.
5. Solicitud de Dictamen Balístico presentado por el abogado Ramón Abraham Hernández Cruz en su condición de Fiscal del Ministerio Público en Juzgado de Letras Seccional de Nacaome, depto. de Valle de fecha 30 de enero 2002 presentado ante el Juzgado de Letras Seccional de Nacaome. Consta en el Anexo 2 Folio 294.
6. Pericia balística realizada en la Dirección de Medicina Forense del Ministerio Público de fecha 12 de abril 2002 Folio. Ver Anexo 2 folio 325.

El **Anexo 3** contiene diferentes diligencias realizadas por el Ministerio Público que no se encuentran incluidas en los tomos antes mencionados. El mismo consta de 51 Folios útiles. Dentro de los documentos citados en pie de página, se encuentran:







*Procuraduría General de la República*  
*República de Honduras*

7. Declaración rendida por Jimmy Javier Pacheco en su condición de testigo ante la Dirección General de Investigación Criminal (DGIC), en fecha 27 de noviembre de 2001 Anexo 3, Folio 10
8. Declaración rendida por el señor Santos Lorenzo Mendoza Cáceres ante la Dirección General de Investigación Criminal (DGIC), en fecha 30 de septiembre de 2004 Anexo 3, Folio 12
9. Información del Sistema de Información Tributaria perteneciente a la Dirección Ejecutiva de Ingresos en el cual se detallan datos de los diferentes vehículos registrados a nombre de las personas denunciadas de fecha 7 de julio del 2005. Anexo 3 folio 15
10. Declaración rendida por el señor Santos Lorenzo Mendoza Cáceres ante la Dirección General de Investigación Criminal (DGIC), en fecha 11 de enero de 2008 Anexo 3, Folio 27
11. Declaración rendida por Jimmy Javier Pacheco en su condición de testigo ante la Dirección General de Investigación Criminal (DGIC), en fecha 22 de mayo de 2008 Anexo 3, Folio 33
12. Ampliación de Declaración de Ofendido rendida por José Pacheco León ante la Fiscalía Especial de Derechos Humanos (FEDH) del Ministerio Público, en fecha 24 de febrero de 2014 Anexo 3, Folio 39.
13. Memorándum FLN-248-2014 de fecha 27 de noviembre de 2014 del Ministerio Público para la Abg. Dunia Flores en su condición de Fiscal de Derechos Humanos. Anexo 3 folio 41.
14. Nota de fecha 17 de septiembre de 2015 remitida al abogado Emilio Álvarez Icaza en su condición de Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por parte del Abogado Jorge Abilio Serrano Villanueva en su condición de Sub-Procurador General de la República y agente alterno del Estado de Honduras. Anexo 3, folio 42.
15. Nota de fecha 12 de octubre 2015 remitida al abogado Emilio Álvarez Icaza en su condición de Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por parte de la señora Berta Oliva de Nativí en su condición de coordinadora del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras. Anexo 3 Folio 44.
16. Declaración de Testigo rendida por José Pacheco en su condición de testigo ante la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) adscrita al Ministerio Público, en fecha 15 de febrero de 2016 Anexo 3, Folio 47.
17. Certificación de Acta de Defunción No. 0801-2005-01668 del señor Jorge Alberto Berrios Escoto. Anexo 3 Folio 49.
18. Nota de fecha 5 de julio de 2016 emitida por el licenciado Carlos Roberto Avilez, gerente financiero del Congreso Nacional de la República en el cual se detalla las cantidades devengadas por el señor José Pacheco, ex diputado propietario por el departamento de Valle, en el periodo 2002-2006. Anexo 3 Folio 50





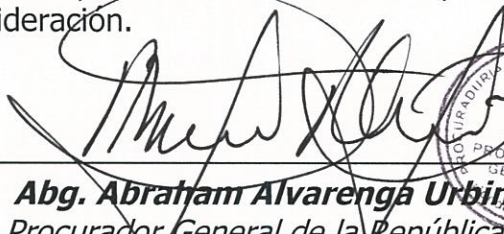

*Procuraduría General de la República*  
*República de Honduras*

**VII. PETITORIO**

En base a las consideraciones anteriores, el Estado de Honduras solicita respetuosamente a la Honorable Corte Interamericana:

1. Que se admita el presente escrito de contestación a la demanda interpuesta en su contra, por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. (CIDH)
2. Se tenga por contestada la demanda, sobre la base de las consideraciones y fundamentos expuestos en contra de todas las supuestas violaciones, declarando que el Estado de Honduras no ha violado los derechos consagrados en los artículos 1.1, 2, 4, 5, 8, 23 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en perjuicio del señor Ángel Pacheco León y sus familiares.
3. Que por consiguiente se dicte sentencia de fondo, declarando sin lugar las acciones incoadas y pretensiones reclamadas en contra del Estado de Honduras.

Aprovecho la ocasión para suscribirme de usted, con las muestras de mi más alta y distinguida Consideración.

**Abg. Abraham Alvarenga Urbina**  
*Procurador General de la República y*  
*Agente del Estado de Honduras ante la Corte IDH*

c.c. Archivo

